



Informe Mensual del Mercado Laboral

Beneficios y costos económicos de un acuerdo de paz

Febrero
2016



INFORME MENSUAL DEL MERCADO LABORAL

FEDESARROLLO

DIRECTOR EJECUTIVO
Leonardo Villar

SUBDIRECTORA
Natalia Salazar

DIRECTORA DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y SECTORIAL
Camila Pérez

ANALISTAS ECONÓMICOS
Viviana Alvarado
Diego Auvert
María Paula Contreras
Carlos Antonio Mesa
Juan Andrés Páez
Alejandro Rueda

ACRIP

DIRECTORA EJECUTIVA
Adriana España Ardila

JUNTA DIRECTIVA
Carlos Guillermo Schmidt | Presidente
Juan Carlos Álvarez | Vicepresidente
Luis Geovanny Cujar
Isabel Rocío Velosa
Caio Bittencourt
Gladys Vega Valencia
Eduardo Lleras
Germán Paris

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Consuelo Lozano
Formas Finales Ltda.
mconsuelolozano@hotmail.com

IMPRESIÓN
Gráficas Ducal Ltda.



EDITORIAL: BENEFICIOS Y COSTOS ECONÓMICOS DE UN ACUERDO DE PAZ*

Introducción

El conflicto armado en Colombia ha impuesto cuantiosos costos humanos y sociales al país por más de cincuenta años. Los orígenes de ese conflicto pueden rastrearse hasta el año 1948, momento en el cual el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán dio inicio al período conocido como *La Violencia*, donde los partidos Liberal y Conservador se enfrentaron a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, los orígenes del conflicto como lo conocemos hoy en día han sido fechados por varios académicos en 1964, con la consolidación de grupos de auto-defensa que ya existían en el campo para esa época.

Tras varios intentos para poner fin al conflicto interno -algunos exitosos y otros fallidos-, el Presidente Juan Manuel Santos decidió a finales del 2012 comenzar un proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual está basado en la negociación de 6 puntos fundamentales que incluyen acuerdos sobre: 1) desarrollo agrario integral; 2) cese al fuego y dejación de armas; 3) y derechos y garantías para la participación política de los grupos opositores; 4) solución al problema de las drogas ilícitas; 5) reparación de víctimas y 6) implementación del acuerdo. El avance de las conversaciones de paz en la Habana y la aceptación y apoyo que ha tenido la iniciativa del proceso de paz en el contexto internacional, sugieren que el fin de una parte importante del conflicto armado en Colombia se acerca, por lo cual múltiples investigaciones se han enfocado en tratar de estimar los costos y beneficios de la paz. El objetivo del presente editorial es discutir las diferentes estimaciones y aproximaciones a los posibles beneficios económicos que podría traer para el país la firma de un acuerdo de paz

con las FARC. Asimismo, se consideran los posibles costos de implementación del acuerdo, tema central dada la coyuntura económica actual del país.

Beneficios de un acuerdo de paz

El conflicto armado en Colombia se ha prolongado por más de cincuenta años y ha impuesto considerables costos sociales y económicos al país. Por un lado, los actos de violencia por parte de los grupos armados han tenido un gigantesco impacto sobre el tejido social del país, dejando una estela devastadora en términos de asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado. Según cifras del Centro de Memoria Histórica, las manifestaciones de violencia de los grupos armados entre 1958 y 2012 cobraron la muerte de cerca de 218.000 personas, en su gran mayoría civiles (81%). Adicionalmente, se estima que entre 1970 y 2010, 27.023 personas fueron víctimas de secuestro (91% por parte de guerrillas) y entre 1996 y 2012, 4.744.046 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado.

En este sentido, existe una amplia certeza de que la paz trae inmensos beneficios de orden social y humano, en la medida en que reduce la victimización y mejora la calidad de vida de los habitantes de las regiones afectadas por la violencia. Cualquier estimación de beneficios económicos de la paz debe entenderse como una aproximación a impactos adicionales que no deben en ningún caso matizar ni opacar lo que constituye el propósito último de un proceso de estas características: avanzar hacia el bienestar humano y la convivencia pacífica.

* La elaboración de este informe contó con la colaboración de María Paula Contreras y Carlos Antonio Mesa.

En este contexto, una gran variedad de estudios ha intentado en los últimos años hacer diferentes aproximaciones y estimativos de los posibles beneficios económicos que un escenario de paz traería para el país, o lo que muchos han denominado el “dividendo de la paz”. Mediante el uso de distintas metodologías, cada una de ellas con sus respectivos limitantes, se han obtenido estimativos muy diversos de cómo cambiaría el panorama macroeconómico del país con la firma del acuerdo de paz, aproximaciones sobre las cuales resultaría apurado sacar conclusiones definitivas.

Una de las dificultades más grandes para la realización de cálculos sobre los dividendos de la paz radica en la necesidad de definir el período de tiempo para el cual se quieren estimar esos dividendos. Así, por ejemplo, podría afirmarse que entre los beneficios más grandes de contar con una sociedad en paz estaría la posibilidad de reducir los gastos en seguridad y defensa -que en una sociedad como la colombiana se acercan al 3,5% del PIB por año- y dedicar esos recursos públicos a actividades más productivas en términos económicos y sociales -*v.gr.* la infraestructura, la educación o la salud pública-. Este argumento, sin embargo, tendría que ser matizado de manera importante en un caso como el colombiano si se quisieran mirar los impactos de la paz en un plazo de cinco o diez años, durante los cuales los gastos en seguridad y defensa tendrán que mantenerse -probablemente con alguna reasignación de recursos del ejército hacia la policía- para evitar la proliferación de bandas criminales que puede surgir ante el desmonte de las organizaciones guerrilleras, tal como lo sugiere la experiencia centroamericana.

Dentro de las investigaciones que han obtenido las estimaciones más optimistas sobre los dividendos económicos de la paz para el caso colombiano se encuentran un estudio de la Universidad de los Andes y otro realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) en conjunto con el Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El primero, mediante el uso de herramientas econométricas, estima con datos a nivel departamental, el efecto que tienen diferentes acciones del conflicto armado y el crimen organizado sobre el ingreso departamental. Particularmente, los autores encuentran que en un escenario en el cual los ataques de la guerrilla se redujeran en un 100%, y todos los demás factores permanecieran constantes, el PIB departamental aumentaría anualmente en promedio 4,4% (Villa *et al.*, 2014)¹. De esta forma, los autores afirman que el beneficio del acuerdo de paz sería supremamente alto, pues el PIB departamental se duplicaría en 8,5 años, aproximadamente la mitad del tiempo que tarda en duplicarse en la actualidad.

Adicionalmente, reconociendo que la población rural y los productores agropecuarios han enfrentado de manera desproporcionada los costos económicos y sociales de la guerra, el estudio hace énfasis en el efecto que ha tenido el conflicto armado sobre las zonas rurales y en particular sobre la producción agrícola de los hogares. El estudio encuentra también que el conflicto deteriora los mercados laborales rurales y lleva a los productores a concentrarse en la producción de cultivos de baja rentabilidad (pero de rápido rendimiento), ubicándolos en sendas de baja producción².

Por su parte, el estudio PNUD-CERAC sostiene que en ausencia del conflicto armado, la economía colombiana habría crecido en promedio a tasas del 8%. Adicionalmente, la investigación indica que la paz tendrá un efecto importante en la disminución de la brecha entre las zonas urbanas y rurales, siendo mayor el beneficio económico en las zonas rurales. De acuerdo con el PNUD, el desplazamiento forzado genera un aumento en la concentración de la propiedad de la tierra productiva en la frontera agrícola, por lo que el fin del conflicto interno llevaría a una mejor distribución de la tierra y a la recuperación de 800.000

¹ Los autores resaltan que los resultados observados permiten obtener una predicción de cuál sería el dividendo de firmar la paz, aunque no necesariamente se pueden interpretar como un efecto causal.

² Arias, M.; Ibáñez, A. “Conflicto Armado en Colombia y producción agrícola: ¿aprenden los pequeños productores a vivir en medio del conflicto?, publicado en Arias, M. *et al.* (2014) “Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?”. Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.

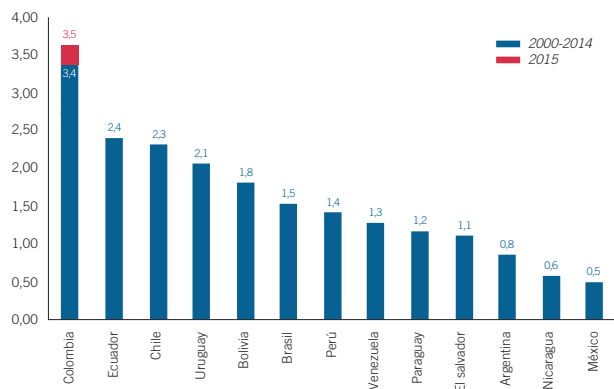
hectáreas de tierra³, lo que generaría mayores oportunidades de desarrollo productivo para el campo.

Cabe resaltar que el estudio reconoce que la paz tendría un efecto heterogéneo a lo largo del territorio nacional, pues si bien el beneficio es generalizado en términos de ingreso y bienestar social, se potencia especialmente el desarrollo en las zonas pobres, alejadas y con menor tamaño poblacional (menos de 100.000 habitantes), generalmente las más afectadas por el conflicto (PNUD-CERAC, 2014).

Ambas investigaciones mencionan que un beneficio adicional del fin del conflicto armado se deriva de una reducción progresiva de los costos asociados al conflicto, dentro de los cuales el gasto en defensa es particularmente relevante para Colombia (Gráfico 1). Una forma de ver un posible recorte en este gasto es a través de la reducción del pie de fuerza militar con el que cuenta la nación para hacer frente a los enfrentamientos.

Los cálculos de Villa *et al.* (2014) y de PNUD-CERAC (2014) pueden sobrestimar en varios aspectos la magnitud de los dividendos económicos de la paz. Como se mencionó anteriormente, si bien es

Gráfico 1. Gasto Militar como % del PIB



Nota: El gasto militar de Colombia para el 2015 fue calculado con base al Presupuesto del sector defensa.

Fuente: Banco Mundial, cálculos Fedesarrollo.

cierto que con un acuerdo de paz que ponga cese a las acciones violentas de los grupos armados no se requerirá de tanto ejército, ello no implica que el gasto destinado a su apoyo automáticamente pueda desaparecer. Cabe incluso la posibilidad de que tras la firma de un acuerdo de paz se requiera de más policía para las zonas urbanas y rurales con el objetivo de velar por la seguridad ciudadana. Esto es reconocido por los mismo estudios, los cuales consideran que en la medida en que la economía no pueda absorber toda la mano de obra desmovilizada, esta podría trasladarse hacia actividades delincuenciales, con lo que el costo del crimen organizado aumentaría y atenuaría sustancialmente el dividendo de firmar la paz (Villa *et al.*, 2014). Adicionalmente, la experiencia de Centro América, en especial de El Salvador, muestra que sería un error reducir las fuerzas armadas en su conjunto antes de 5 o 10 años luego de finalizado el conflicto armado.

Por su parte, en diciembre de 2015 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) reveló los resultados de un estudio basado en un análisis comparativo de la experiencia de una serie de países que finalizaron conflictos armados y que han tenido un proceso de paz con condiciones similares al proceso colombiano. El estudio concluye que el gran dividendo de la paz en Colombia es la confianza, la cual se verá reflejada tanto a nivel interno (dinamización del consumo, ahorro e inversión) como externo (aumento de los flujos de inversión extranjera). Concretamente, el DNP estima que el dividendo estaría en un rango entre 1,1 y 1,9 puntos porcentuales adicionales al crecimiento anual de la economía, lo cual llevaría al crecimiento potencial de la economía colombiana a un nivel de 5,9% y no de 4%. De acuerdo con el estudio, los mayores beneficios económicos del fin del conflicto en términos de crecimiento se observarían principalmente en los 3 años siguientes a la firma del acuerdo.

En el 2013, el DNP realizó otra investigación (Santamaría *et al.*, 2013) en la cual se estima el impacto que tendría el fin del conflicto armado, específicamente sobre el mercado laboral. Los autores estiman los impactos de una disminución del 70% en los gastos

³ “Los programas agrícolas”. Diario El Espectador. Kalmanovitz, 2014.

en servicios de seguridad privada como resultado de la eliminación del conflicto. Esta disminución del gasto en seguridad aceleraría de manera gradual el crecimiento económico potencial en 0,8 puntos porcentuales en un periodo de 8 años como consecuencia de la mayor productividad de los empleos que antes estaban en seguridad. El trabajo mencionado argumenta que ese aumento en la productividad y el consiguiente incremento en el ingreso nacional tendrían un efecto escalonado en la generación de empleo. Al principio éste sería modesto, pero al cabo de 8 años, la disminución del conflicto representaría 1,37 millones de ocupados adicionales. En este sentido, el fin del conflicto tendría un impacto negativo en el corto plazo, dada la eventual reducción del gasto en seguridad privada. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el nuevo escenario de paz generaría crecimiento y de esta forma se suscitaría la creación de nuevos puestos de trabajo. Ahora bien, debido a que el conflicto no afecta a todas las zonas y sectores económicos por igual, se espera que el sector rural sea uno de los más beneficiados, por lo que las mejores condiciones de seguridad en dichas zonas podrían convertir al sector agropecuario en una fuente importante de generación de empleo en la economía. Lo mismo podría ocurrir con el sector minero, en la medida en que se potencie la exploración y extracción petrolera en algunos departamentos.

Otras estimaciones tratan de identificar el beneficio económico de la paz desde la perspectiva del impacto que ha tenido la violencia guerrillera sobre el crecimiento del PIB o la productividad. Los estudios realizados encuentran que se ha perdido entre un 0,4 y 2,5% del crecimiento por efecto del conflicto armado⁴, por lo que el beneficio de un acuerdo de paz se ubicaría dentro de dicho rango. En particular, un estudio de Mauricio Cárdenas, estimó mediante herramientas econométricas la relación entre la tasa de homicidios y la productividad total de los factores, encontrando que un aumento en la tasa de homicidios como el que se observó en Colombia a partir de la década de los ochenta genera reducciones de hasta un 2% en el crecimiento anual de la productividad (Cárdenas, 2001).

Las estimaciones presentadas en los estudios mencionados pueden adolecer de dos tipos de problemas. El primero está relacionado con el uso de la variable homicidios como principal indicador; si bien esta variable logra medir de cierto modo el impacto que ha tenido el conflicto sobre la población, no hay certeza en cuánto se verá reducida por un eventual acuerdo de paz. La otra limitación que se encuentra es que la estimación que se hace no necesariamente captura que el impacto económico de la paz puede ser muy distinto en zonas con niveles altos de ingreso que en zonas aisladas y con condiciones de desarrollo menos favorables.

Francisco Rodríguez, economista del Bank of America-Merrill Lynch (Rodríguez, 2014) presenta un enfoque alternativo que soluciona varios de los problemas anteriormente mencionados, obteniendo resultados más cercanos a los que podría esperarse para el caso colombiano luego de la firma del acuerdo de paz. Restringiendo su análisis a los homicidios atribuidos a la guerrilla y diferenciando el posible beneficio económico de la paz a nivel departamental, Rodríguez observa que la reducción de la violencia vinculada con el conflicto tiene un efecto positivo sobre el crecimiento en todos los departamentos del país, aunque en la mayoría de casos este no sobrepasa los 0,5 puntos porcentuales. Se presentan efectos relativos grandes en cinco departamentos: Guaviare (+2,5%), Vichada (+2,4%), Guainía (1,4%), Caquetá (0,9%) y Putumayo (0,8%). No obstante, el peso de dichos departamentos dentro del PIB nacional es bajo, razón por la cual el efecto agregado sobre la economía nacional es un aumento de solo 0,27% del crecimiento del PIB, tomando como referencia el período 2011-2013.

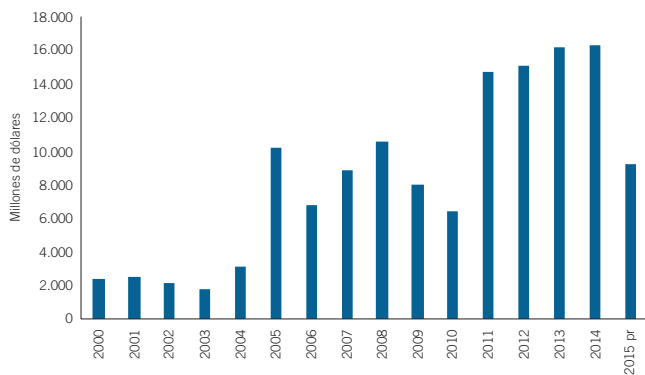
Dicha estimación se encuentra muy por debajo de otras anteriormente referidas, lo cual se explica por el período de análisis escogido, en el cual el nivel de intensidad del conflicto es considerablemente menor al de otros periodos. En particular, Rodríguez menciona que si el periodo de referencia cambiara a 1999-2005, el impacto sobre el crecimiento se acercaría a 1%

⁴ Dentro de los estudios que realizan estos cálculos se encuentran los de Rubio (1995), Cárdenas (2001), Echeverry, Salazar y Navas (2001), Vargas (2003), Querubin (2003) y Vila, Moscoso y Restrepo (2012). Información tomada del documento *The Peace Premium* elaborado por el Bank of America - Merrill Lynch (2014).

del PIB. Lo anterior implica que durante el 2011-2013 el país ya ha percibido buena parte del beneficio macroeconómico, producto de la reducción de la violencia, lo cual se ha reflejado en variables como la inversión extranjera directa, cuyo aumento en los últimos 12 años ha sido sustancial con respecto a lo que solíamos recibir antes de 2004 (Gráfico 2).

Si bien se observa que en el corto plazo los beneficios macroeconómicos del fin del conflicto serán pequeños a nivel agregado, estos se potenciarán en mayor medida en el mediano y largo plazo como producto de una posible reducción en el gasto en seguridad y defensa.

Gráfico 2. Flujos de Inversión Extranjera Directa



Fuente: Banco de la República.

Costos del posconflicto

A diferencia de los estudios que han estudiado los dividendos económicos de la paz, no son muchos los que analizan los costos que implica para el país poner en funcionamiento los diferentes puntos de un acuerdo de paz. Informalmente se ha mencionado que el posconflicto podría llegar a costar entre 80 y 90 billones de pesos en los próximos 10 años, lo que equivale a algo más de 1% del PIB por año durante ese lapso. Rodríguez por su parte, estima que los costos en los que debería incurrir el país para implementar el proceso de paz podrían variar entre 1,1 y 3,8% del PIB anual, por un período de 10 años, dependiendo de qué tan ambiciosos sean los programas del posconflicto. El autor reconoce que en la actualidad ya se está trabajando en la implementación de ciertos programas, por lo que estima el costo

neto de la implementación del acuerdo en un rango de 0,8 y 3,5% del PIB anual (Rodríguez, 2014).

Sin embargo, estos estimativos se encuentran probablemente sobredimensionados en la medida en que incluyen rubros en los cuales el país debe incurrir independientemente de la firma del acuerdo de paz, tales como los gastos de desmovilización, reinserción, reparación de víctimas, y los referentes a la provisión de infraestructura y bienes públicos. Algunos de esos gastos no surgen del proceso de paz. En el caso de la desmovilización, la reinserción y la reparación de víctimas sería más razonable clasificarlos como parte de los costos de la guerra. Otros costos, como los de provisión de infraestructura y bienes públicos en zonas que tradicionalmente han estado abandonadas por el Estado, pueden entenderse como el plan de inversiones que sería deseable realizar con o sin paz, en aras del desarrollo económico y social de esas regiones.

En efecto, muchos de los costos adjudicados al posconflicto están relacionados con la implementación de un programa de desarrollo rural. Sobre este punto, un estudio realizado por Fedesarrollo para la Misión para la Transformación del Campo (Ramírez *et al.*, 2016), estimó que el costo fiscal de la implementación de las diferentes estrategias propuestas por dicha Misión, asciende a un promedio de 13 billones de pesos por año (en un horizonte de 15 años), lo cual representaría el 1,2% del PIB. La evolución de dicho gasto durante el horizonte de tiempo considerado es disímil, incrementándose de forma importante durante los primeros 5 años y reduciéndose gradualmente en los años restantes. Si bien es cierto que un programa para el desarrollo rural podría realizarse en mejores condiciones gracias a la firma de un acuerdo de paz, sus costos no pueden ser adjudicados en su totalidad al posconflicto.

De igual forma ocurre con los recursos necesarios para los procesos de reinserción y reintegración de los desmovilizados a la vida económica, los cuales podrían considerarse como un costo de la guerra y no como producto del acuerdo de paz. Con la aprobación de la Ley de Víctimas en el 2011, se puso en marcha la política de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Atendiendo a la sostenibilidad de dicha política, el Gobierno tiene proyectado ejecutar al menos 9,5 billones de pesos en cada

vigencia por lo que resta de la Ley, lo cual equivale a cerca del 1% del PIB anual⁵.

Adicionalmente, desde hace unos años, el Gobierno ha venido trabajando en iniciativas para promover la reinserción de los desmovilizados al mercado laboral a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Esta entidad adscrita a la Presidencia, ha tenido asignado en promedio un presupuesto de 150 mil millones de pesos por año (en los últimos tres años), el cual ha ido disminuyendo en los últimos años. Esta cifra equivale a cerca del 0,02% del PIB en dicho período. Además, de acuerdo con la ACR, la reinserción es la salida más eficiente y más barata al conflicto, pues el proceso de reintegración cuesta \$5,7 millones al año por persona durante 6,5 años, cerca de una tercera parte de lo que costaría tenerlo en una cárcel.

Consideraciones finales

Dado el fuerte impacto humano y social que ha tenido el conflicto armado en el país, es ampliamente reconocido que la paz tendrá inmensos beneficios de orden ético y social. Respecto a los posibles beneficios macroeconómicos, se han obtenido diversos estimativos como resultado de distintas metodologías de cálculo, a las cuales se les puede atribuir una serie de limitaciones. Dadas las características del conflicto armado en Colombia, los beneficios económicos serán heterogéneos a lo largo del territorio nacional;

estos serán particularmente grandes en algunas regiones del país, pero probablemente no lo serán a nivel agregado como algunos de los analistas han sugerido. Cabe reiterar que lo anterior no mitiga las enormes ventajas no económicas que tendría el fin del conflicto para Colombia.

En cuanto al impacto sobre el mercado laboral, se ha estimado que la generación de empleo se verá beneficiada de manera gradual con el fin del conflicto en la medida en que se estimule la actividad productiva y el ingreso nacional. Incluso si hay algunos efectos negativos de corto plazo, tales como los que estiman Santamaría *et al.* (2013) como consecuencia de menores gastos en seguridad privada, ello se vería compensado con el paso del tiempo mediante mayor empleo en otros sectores económicos más productivos para la sociedad.

Ahora bien, cabe resaltar que aunque los beneficios macroeconómicos del fin del conflicto pueden ser pequeños a nivel agregado en el corto plazo, estos se potenciarán en el mediano y largo plazo como producto de una posible reducción en el gasto en seguridad y defensa.

Por su parte, los costos que se adjudican al posconflicto (desmovilización y reintegración, reforma rural, provisión de bienes públicos) son en alto grado gastos en los que debe incurrir la sociedad colombiana con o sin la firma del acuerdo de paz.

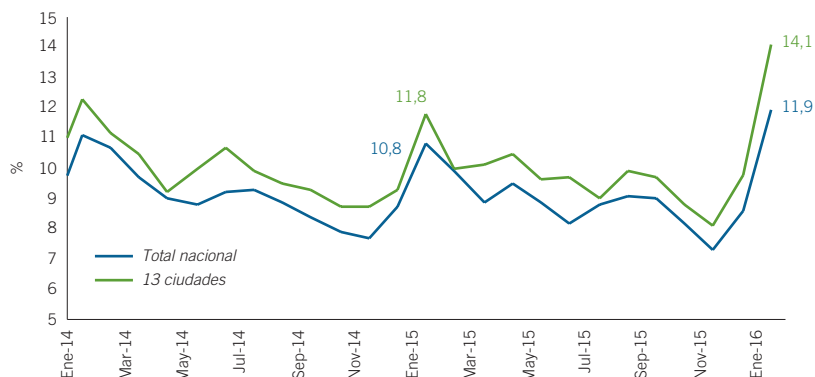
Referencias

- Cárdenas, M. (2001). "Economic Growth in Colombia: a Reversal of "Fortune"?" Center for International Development at Harvard University, CID Working Paper No. 83. Reimpreso en español en el 2007 en Ensayos sobre Política Económica, Vol. 25, Núm. 53, PP. 220-259, Banco de la República.
- DNP (2015). "Dividendo Económico de la Paz". Foro Conversatorio Dividendos que deja la paz en Colombia.
- PNUD-CERAC (2014). "¿Qué ganará Colombia con la Paz?". Resumen Ejecutivo.
- Ramírez J. *et al.* (2016). "Impacto fiscal de las recomendaciones de la Misión de Transformación del Campo". Working Paper No. 70. Fedesarrollo.
- Rodríguez F. (2014). "Colombia Viewpoint: The Peace Premium". Bank of America - Merrill Lynch.
- Santa María, M; Rojas N. y Hernández G. (2013). "Crecimiento económico y conflicto armado en Colombia". Archivos de Economía (400). Dirección de Estudios Económicos - DNP.
- Villa, E.; Restrepo, J.; Moscoso, M. (2014). "Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para Colombia", publicado en Arias, M. *et al.* (2014) "Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?". Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.

⁵ Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

COYUNTURA DEL MERCADO LABORAL

Gráfico 1. Tasa de desempleo nacional y 13 ciudades principales

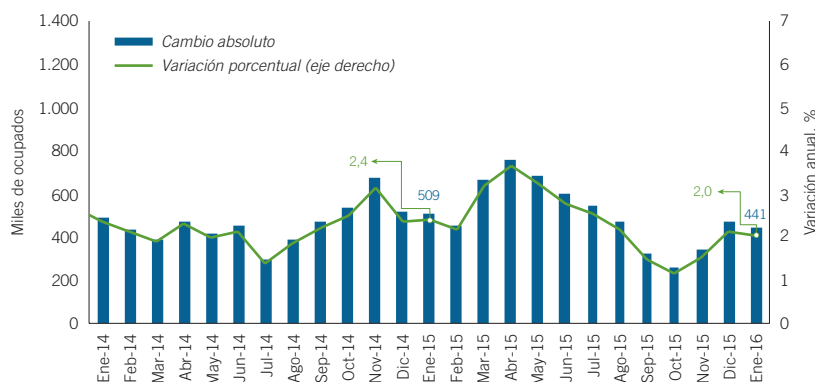


Fuente: DANE.

En enero, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 11,9%, un aumento de 1,1 puntos porcentuales (pps) respecto al mismo mes del año pasado. Con este dato, se interrumpe la tendencia a la baja de los últimos 5 años que presentaba este indicador.

Por su parte, para las 13 ciudades principales, la tasa de desempleo en el mes de enero se situó en 14,1%. Esta cifra presentó un significativo aumento, situándose 2,3 pps por encima al dato de enero del año anterior.

Gráfico 2. Cambio anual en el total nacional de ocupados (Trimestre móvil)

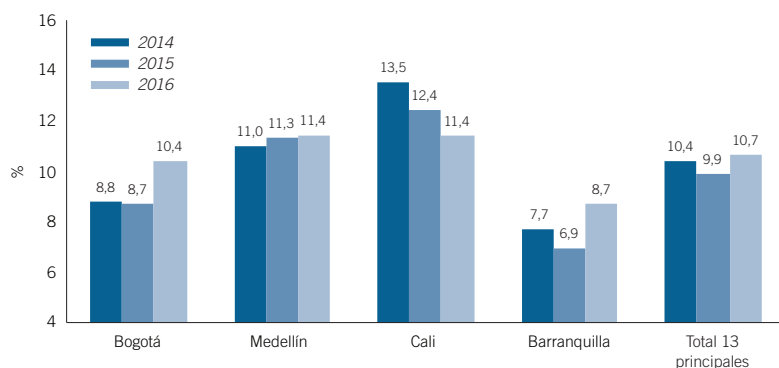


Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Durante el trimestre móvil noviembre-enero, el total de ocupados en Colombia se incrementó en 441 mil respecto al mismo período del año anterior, equivalente a una variación anual de 2,0%.

Este ritmo de creación de empleo es alto para estándares históricos y pone de presente que, pese a la desaceleración económica, el aumento en la tasa de desempleo a nivel nacional fue inducida fundamentalmente por aumento en la participación laboral (aumento en la oferta) y no por una menor demanda de trabajo.

Gráfico 3. Desempleo en las principales ciudades (Trimestre noviembre-enero)

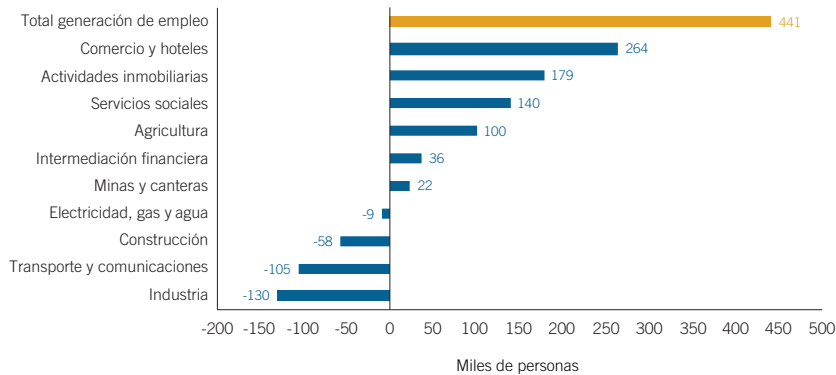


Fuente: DANE.

En el trimestre noviembre-enero, la tasa de desempleo para las trece principales ciudades se ubicó en 10,7%, un aumento de 0,8 pps respecto al mismo período del año anterior. Mientras Cali sigue consistentemente reduciendo su indicador de desempleo, Bogotá y Barranquilla mostraron aumentos significativos.

Es de notar que aunque la tasa de desempleo en el trimestre móvil aumentó 0,4 pps en la zona urbana, en la zona rural se redujo 0,6 pps, ubicándose en 10,3% y 5,3% respectivamente.

Gráfico 4. Contribución anual a la generación de empleo por sectores económicos (Trimestre noviembre-enero)



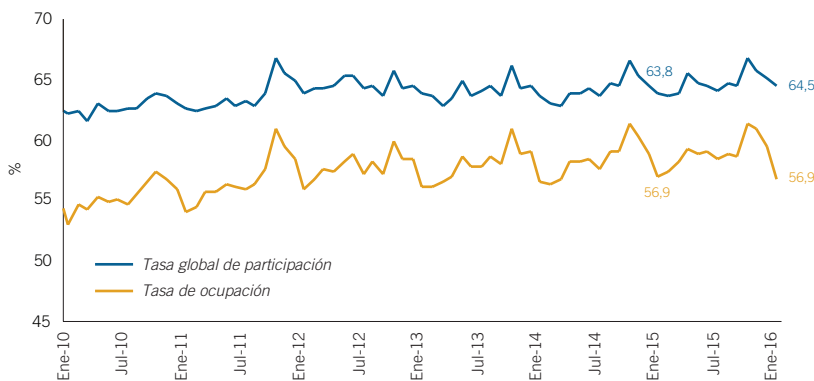
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Cuadro 1. Creación de empleo por posición ocupacional (Trimestre noviembre-enero)

	Miles de personas
Empleado particular	150
Empleado del gobierno	23
Empleado doméstico	-38
Cuenta propia	300
Empleador	2
Trabajador familiar sin remuneración	-44
Trabajador sin remuneración en otras empresas	-3
Jornalero	49
Otro	3
Total	441

Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Gráfico 5. Tasa global de participación y de ocupación



Fuente: DANE.

Durante el trimestre móvil noviembre-enero, el comercio y hoteles, las actividades inmobiliarias, los servicios sociales y la agricultura generaron en conjunto 683 mil nuevos empleos. Estos sectores contribuyeron con 3,1 pps a la variación total del empleo.

Es de notar que la industria continúa mostrando un mal desempeño en la generación de empleo, completando siete trimestres móviles consecutivos con balance negativo. Durante el trimestre noviembre-enero ese sector redujo 130 mil puestos de trabajo.

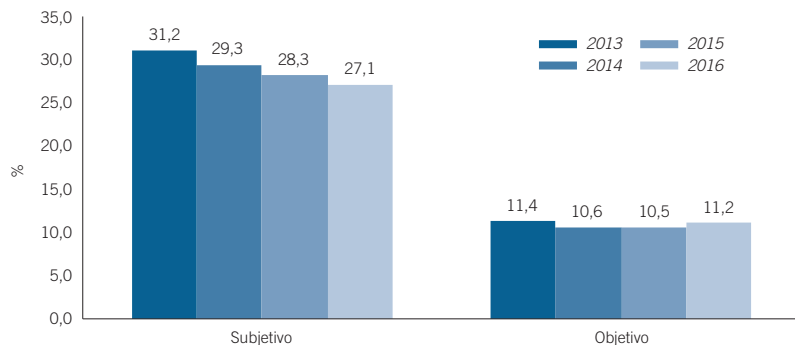
Para el total nacional, en el trimestre móvil noviembre-enero, el número de trabajadores por cuenta propia aumentó 3,2% (300 mil nuevos puestos) y los empleados particulares aumentaron 1,8% (150 mil puestos) frente al mismo período del año anterior.

Aunque la recomposición de trabajos sin remuneración hacia trabajos remunerados que se viene produciendo afecta positivamente la calidad de los empleos, el superior crecimiento del 'cuentapropismo' disminuye la calidad del mismo.

En enero, la tasa de ocupación (TO) se mantuvo inalterada frente a la cifra observada doce meses atrás. Por su parte, la tasa global de participación (TGP) mostró un aumento de 0,7 pps, ubicándose en 64,5%.

Por otra parte, la tasa de ocupación para las 13 ciudades principales presentó -por segundo mes consecutivo- una reducción de 1,5 pps, situándose en 58,4%.

Gráfico 6. Subempleo en Colombia

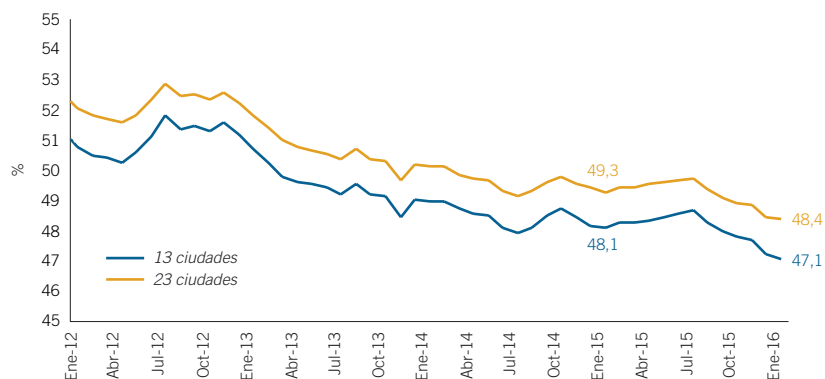


Fuente: DANE.

En enero, la tasa de subempleo subjetivo presentó una reducción de 1,2 pps respecto a enero de 2015, situándose en 27,1%. Ahora bien, el número de personas que manifiesta insuficiencia de horas aumentó 6,7% (136 mil personas) respecto al mismo mes de 2015.

En enero, las personas que se consideraban en situación de subempleo y que hicieron gestiones para materializar su aspiración aumentaron en 229 mil. Con esta cifra, la tasa de subempleo objetivo se ubicó en 11,2%, 0,7 pps por encima que la cifra doce meses atrás.

Gráfico 7. Informalidad en las 13 y 23 principales ciudades* (Trimestre noviembre-enero)



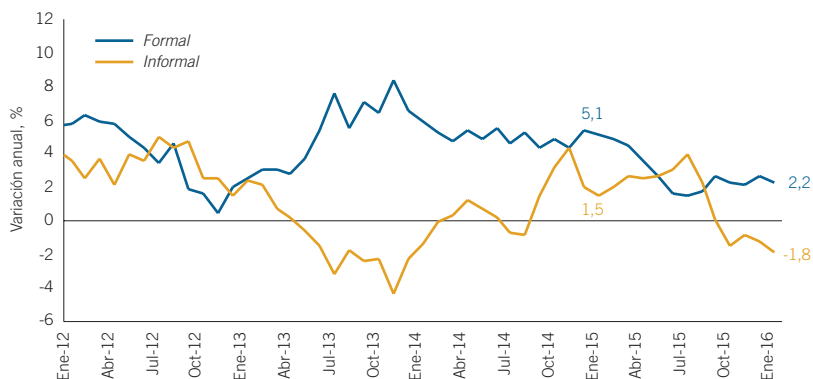
* Trimestre móvil finalizado en el mes de referencia.

Fuente: DANE.

La tasa de informalidad para las trece ciudades principales se ubicó en 47,1% y para las veintitrés ciudades se situó en 48,4%. En ambos casos, esta cifra resulta ser la más baja desde el 2007, i.e., desde que se tiene registro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Para el trimestre móvil noviembre-enero, el segmento de trabajador por cuenta propia acumuló el 60,6% de la población ocupada informal en las 13 ciudades principales, mientras que para las 23 ciudades principales esta proporción fue de 62,0%.

Gráfico 8. Generación de empleo formal e informal en las 13 principales ciudades* (Trimestre noviembre-enero)



* Trimestre móvil finalizado en el mes de referencia.

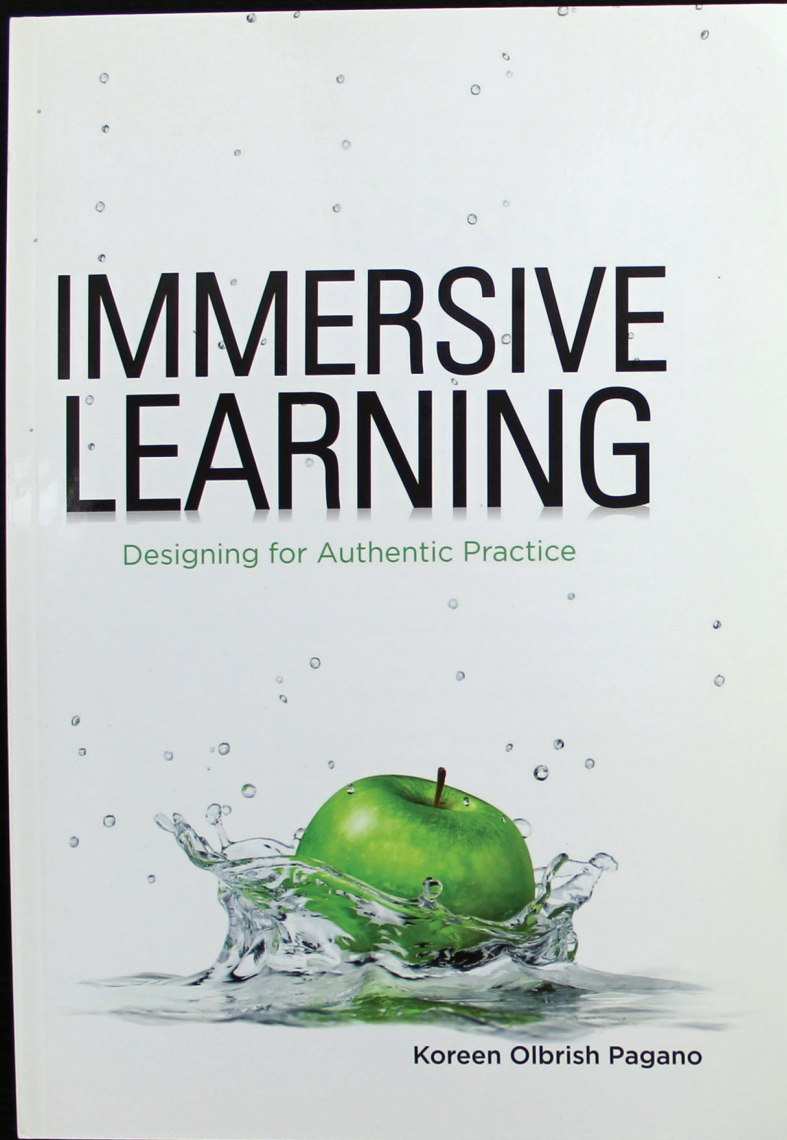
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Durante el trimestre noviembre-enero, la generación de empleo formal en las trece principales ciudades creció 2,2% respecto al mismo periodo un año antes. Este crecimiento estuvo impulsado por los segmentos de actividades inmobiliarias y de servicios sociales, donde en conjunto se generaron 177 mil nuevos puestos formales.

Por el contrario, para el trimestre noviembre-enero, la generación de empleo informal presentó una contracción de 1,8% respecto a la cifra del año anterior. Durante ese periodo, el segmento de transporte y comunicaciones y la industria manufacturera presentaron la mayor reducción de trabajo informal (125 mil puestos menos).

Aprenda más en Menos tiempo

Desarrolle sus competencias aprendiendo los conceptos claves de cada libro en menos de 10 minutos.



Utilizado por las 10 compañías más grandes de Colombia.



“El aprendizaje colaborativo y social, el coaching, la tutoría, la retroalimentación en tiempo real del desempeño en ambientes realistas; todo esto es posible en el aprendizaje inmersivo.”

Si desea probar un demo para su compañía favor contactar:

Alejandro Arango Mesa D: 571 482 40 80 / 574 266 74 05 C:311 600 80 16 AlejandroArango.Mesa@getAbstract.com

Calle 93B #13-30 Of. 207 Bogotá/ Torre Davivienda, Of.1006 Medellín

www.getabstract.com

}getabstract
compressed knowledge®